

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

26ª REUNIÓN — 15ª SESIÓN ORDINARIA — 5 DE JULIO DE 1995

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,
del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don **ORALDO N. BRITOS**,
y del señor presidente de la Comisión de Recursos Hídricos,
doctor **RICARDO A. BRANDA**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P. V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AVELIN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César
MARANGUELLO, Pedro Carlos
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio

MOLINA, Pedro E.
PEÑA de LÓPEZ, Ana
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

ALASINO, Augusto
BRAVO, Leopoldo
JUÁREZ, Carlos A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MARTÍNEZ, Daniel E.
OYARZÚN, Juan Carlos
RIVAS, Olijela del Valle
SAPAG, Felipe R.
STORANI, Conrado H.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 2338.)
2. **Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por La Pampa doctor Martínez Almudevar procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.** (Página 2338.)
3. **Homenajes:**
 - I. **A la memoria de don Hipólito Yrigoyen.** (Página 2338.)
 - II. **A la memoria del doctor Vicente L. Saadi. Se considera y aprueba un proyecto de declaración** (S.-711/95). (Pág. 2340.)
4. **Manifestaciones del señor senador Figueroa respecto del doctor Eduardo Menem con motivo de finalizar su mandato como máxima autoridad del Honorable Senado.** (Pág. 2341.)
5. **Asuntos entrados:**
 - I. **Comunicaciones de la Presidencia.** (Página 2342.)
 - II. **Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel Gonzalo Jaime López Belsué.** (P.E.-305/95). (Pág. 2342.)
 - III. **Proyecto de ley en revisión por el que se devuelve con modificaciones el proyecto de ley sobre fiscalización y control de calidad por parte del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) de todos los productos, subproductos y derivados de vegetales** (S.-1.579/92). (Pág. 2342.)
 - IV. **Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.** (Pág. 2343.)
 - V. **Comunicaciones de señores senadores.** (Pág. 2343.)
 - VI. **Comunicaciones oficiales.** (Pág. 2343.)
 - VII. **Dictámenes de comisiones.** (Pág. 2343.)
 - VIII. **Peticiones particulares.** (Pág. 2345.)
 - IX. **Proyecto de comunicación de los señores senadores Storani y Cendoya por el que se solicitan informes acerca de la asignación y distribución de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos** (S.-681/95). (Pág. 2345.)
 - X. **Proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicita se disponga una ayuda financiera extraordinaria para atender las necesidades del sistema hospitalario de la provincia de San Juan.** (S.-683/95) (Pág. 2346.)
 - XI. **Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes acerca del requerimiento de la Policía Federal a la Cámara Nacional Electoral relacionado con la afiliación partidaria de detenidos durante una marcha estudiantil** (S.-684/95). (Página 2346.)
 - XII. **Proyecto de resolución de los señores senadores Solana y Mazzucco por el que se solicita se contemple el restablecimiento de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como autoridad nacional de aplicación de la ley 22.428 (Fomento de la Conservación de Suelos)** (S.-686/95). (Pág. 2347.)
 - XIII. **Proyecto de resolución de los señores senadores Solana y Storani por el que se solicita se restablezca el subsidio a los productores agropecuarios** (S.-687/95). (Pág. 2348.)
 - XIV. **Proyecto de resolución del señor senador Losada por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que se abstenga de modificar por decreto la ley 19.800 (Fondo Especial del Tabaco)** (S.-688/95). (Pág. 2349.)
 - XV. **Proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicita se adopten las medidas necesarias con el objeto de apoyar la realización del "Proyecto de Prevención y Control de la Desertificación para el Desarrollo de la Patagonia" (Prodeser)** (S.-689/95). (Página 2349.)
 - XVI. **Proyecto de comunicación del señor senador Genoud por el que se solicitan informes sobre las investigaciones acerca de la filiación política o partidaria de los detenidos en una manifestación estudiantil** (S.-690/95) (Pág. 2353.)
 - XVII. **Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita se instrumenten tareas de inteligencia para la prevención y esclarecimiento de actos terroristas** (S.-691/95). (Pág. 2354.)
 - XVIII. **Proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se designen representantes de los trabajadores mineros como integrantes de la Comisión Fiscalizadora del Proceso de Privatización del Yacimiento de Río Turbio** (S.-692/95). (Pág. 2354.)
 - XIX. **Proyecto de declaración del señor senador Genoud por el que se repudian las expresiones vertidas por un funcionario del Banco Mundial acerca del proyecto sobre Educación Superior** (S.-693/95). (Pág. 2355.)

Poder Ejecutivo para que la tramitación del DNI (Documento Nacional de Identidad) no demore más de 30 días (S.-344/95). Se aprueba un proyecto de comunicación. (Pág. 2390.)

18. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por el que se adhiere a la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones, celebrado el pasado 17 de mayo (S.-386/95). Se aprueba. (Pág. 2391.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se rinde homenaje a Aníbal Troilo "Pichuco" en el 20° aniversario de su fallecimiento (S.-473/95). (Pág. 2392.)
20. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en los siguientes proyectos de declaración: uno del señor senador Solari Yrigoyen, otro de la señora senadora Rivas y un tercero del señor senador Cafiero por los que se expresa pesar por el fallecimiento del obispo del Neuquén, monseñor Jaime de Nevares (S.-416, 417 y 468/95). Se aprueba otro proyecto de declaración. (Pág. 2393.)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de Minería en el proyecto de ley del señor senador Molina por el que se crea el Banco Nacional de Información Minera sobre equipamiento y recursos humanos (S.-227/95.). Se aprueba. (Pág. 2396.)
22. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual observó en forma parcial el proyecto de ley registrado bajo el número 24.485, insistiéndose en su sanción originaria (P.E.-101/95.). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2397.)
23. Consideración del dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley del señor senador Mac Karthy por el que se declara de interés nacional el Proyecto de Desarrollo Sustentable para la Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia (Prodeser), instrumentado por el INTA (S.-158/95). Se aprueba. (Pág. 2406.)
24. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de resolución del señor senador Ludueña por el que se rinde homenaje a la tripulación del crucero "General Belgrano" (S.-335/95). Se aprueba. (Pág. 2408.)
25. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de declaración del señor senador Martínez Almudevar por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento del reconocido doctor Arnaldo Rascovsky (S.-365/95). Se aprueba. (Pág. 2409.)
26. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de declaración del

señor senador Ludueña por el que se rinde homenaje al escritor y poeta Pedro Bonifacio Palacios, "Almafuerte", en el 141° aniversario de su nacimiento (S.-374/95). Se aprueba. (Pág. 2410.)

27. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de comunicación del señor senador Martínez Almudevar por el que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, arbitre las medidas necesarias tendientes a impedir la supresión y/o traslado del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Crédito Prendario de la localidad de General Acha, La Pampa (S.-385/95). Se aprueba. (Pág. 2411.)
28. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el informe remitido por la Auditoría General de la Nación con respecto al cobro de la tasa complementaria año 1993 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (O.V.-395/94). Pasa al archivo. (Pág. 2411.)
29. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el informe remitido por la Auditoría General de la Nación sobre las recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos contables y de control interno de la empresa Petroquímica Bahía Blanca (O.V.-435/94). Pasa al archivo. (Pág. 2412.)
30. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el informe remitido por la Auditoría General de la Nación sobre el examen practicado en el balance del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 1993 (O.V.-522 y 547/93). Pasa al archivo. (Pág. 2412.)
31. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración referido a la resolución de la Auditoría General de la Nación 112/93, de fecha 9 de septiembre de 1993, por la cual se declara que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se encuentra sujeta al control externo de ese organismo, en los términos de la ley 24.156 (O.V.-530/93). Pasa al archivo. (Pág. 2413.)
32. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración referido a la resolución de la Auditoría General de la Nación 86/93, de fecha 10 de agosto de 1993, por la cual se declara que el Instituto de Vivienda del Ejército, se encuentra sujeto al control externo de ese organismo, en los términos de la ley 24.156 (O.V.-529/93). Pasa al archivo. (Pág. 2413.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el informe remitido por la Auditoría General de la Nación sobre las recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos contables y

tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.

La razón es bien simple. Tanto en la propia secretaría del área, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), facultades de geología de universidades nacionales e institutos de la misma, la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, existen valiosos equipamientos y equipos profesionales que pueden contribuir positivamente al sector minero nacional en la medida en que el inversor minero esté compenetrado de los servicios que pueden prestar.

El momento no puede ser más adecuado. El Congreso Nacional ha sancionado en los últimos años leyes fundamentales para el desarrollo minero nacional, un sector de nuestra economía con gran potencial, pero que lamentablemente contribuía escasamente a la formación de la riqueza del país.

Para modificar el panorama minero se aprobaron la Ley de Inversiones Mineras 24.196, que entre otros importantes aspectos garantiza estabilidad fiscal por treinta (30) años; la Ley de Recordenamiento Minero 24.224, que dispone la ejecución del carteo geológico regular y sistemática del territorio nacional con el fin de inventariar los recursos naturales no renovables para estimular inversiones y posibilitar así el asentamiento poblacional. Esta ley, además, elevó el valor del canon minero que hasta ese momento era insignificante, permitiendo una gran especulación en detrimento de la inversión.

No menos importante y trascendente ha sido la aprobación del Acuerdo Federal Minero, ratificado por ley 24.228, la ley 24.402 de financiamiento del Impuesto al Valor Agregado para importaciones destinadas al sector minero, y están en tratamiento parlamentario los proyectos de Ley de Protección Ambiental para la Minería y de Actualización Minera, el primero de los cuales tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados, en tanto que el segundo fue sancionado en diciembre pasado por este Honorable Senado de la Nación.

El conjunto de esos instrumentos legales ha permitido incentivar fuertemente las inversiones mineras. Así mientras que en 1991 las inversiones solamente representaron 4 millones de dólares en exploración, éstas fueron creciendo hasta alcanzar en 1994 un total de 43 millones, previéndose que las inversiones alcanzaran a 100 millones durante el presente año.

El interés que ha despertado la minería argentina queda también reflejado en el hecho que en 1993 existían solamente dos empresas extranjeras operando en el sector en tanto que actualmente se encuentran trabajando aproximadamente 90 empresas atraídas por las nuevas condiciones operadas en el país, explorando unas 500 áreas de nuestro territorio en busca de minerales metalíferos, por lo que se espera en los próximos años un fuerte crecimiento de este sector de la economía nacional.

Por ello el proyecto de ley que presentamos es coherente con la nueva política minera que se está realizando en el país, ya que el banco de datos de equipamiento y de recursos humanos permitirá contribuir en la toma de decisiones en el sector minero.

En el proyecto de ley se postula que la base de datos esté bajo dependencia de la Secretaría de Minería de la Nación, en razón de contar en su ámbito con el Instituto Nacional de Tecnología Minera (Intemin), que entre las importantes funciones que cumple en favor del sector minero se cuenta la difusión de archivos de información, contando por ello con el suficiente equipamiento y equipos para concretar los propósitos de esta ley.

Con el fin de mantener actualizados los archivos se postula que la información sea actualizada al menos una vez por año.

En lo que respecta al sector minero privado se considera que será optativo el suministro de la información al banco de datos de los equipamientos y recursos humanos que posean.

Se invita también a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley o integrarse al Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos con la información generada en sus respectivas jurisdicciones, pudiendo optar en tal caso con terminales del banco de datos.

Pedro E. Molina.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

22

CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se observa en forma parcial el proyecto de ley registrado con el número 24.485. La comisión aconseja insistir en la sanción originaria (Orden del Día N° 225).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el decreto 538/95 del Poder Ejecutivo nacional registrado bajo el número (P.E.-101/95), mediante el cual observó en forma parcial el proyecto de ley registrado bajo el número 24.485 y os aconseja insistir en su anterior sanción.

De acuerdo al artículo 120 del reglamento del Honorable Senado de la Nación el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 14 de junio de 1995.

*Juan C. Romero. — Fernando de la Rúa. —
Ricardo A. Branda. — Felipe E. Ludueña.
— Antonio F. Cafiero. — Augusto J. M.
Alasino. — Guillermo E. Snopek.*

Texto de la sanción en que se insiste

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ..

Artículo 1º — Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro nacional. Facúltase al Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcionamiento el sistema creado por el presente artículo.

Art. 2º — Introdúcense las siguientes modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por ley 24.144:

1. Agrégase como último párrafo del inciso c) del artículo 17, el siguiente texto:

Cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al sistema financiero, o cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable a juicio de la mayoría absoluta del directorio, podrán excederse los plazos y máximos por entidad previstos por el inciso b) precedente y en el primer párrafo de este inciso, sin que en ningún caso puedan comprometerse para ello las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria. Cuando se otorgue este financiamiento extraordinario, además de las garantías que se constituirán con activos de la entidad, los socios prestatán como mínimo el capital social de control de la entidad y prestarán conformidad con la eventual aplicación ulterior del procedimiento previsto en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. Podrá exceptuarse de este requisito a los bancos oficiales.

2. Modifícase el inciso d) del artículo 17, que quedará redactado de la siguiente forma:

d) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos, y la toma de préstamos de organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales o entes de los cuales sólo el banco pueda ser prestatario, por sí o por cuenta del Tesoro nacional como agente financiero de la República, sin que en ningún caso pueda comprometer las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria.

3. Agrégase como inciso e) del artículo 17, el siguiente texto:

e) Ceder, transferir o vender los créditos que hubiere adquirido de las entidades financieras afectadas de problemas de liquidez.

4. Incorpórase como inciso b) del artículo 18 el siguiente texto:

b) Encomendar a los fideicomisos que constituya el Poder Ejecutivo nacional o las entidades financieras que autorice para ello, la gestión y transferencia de activos y pasivos financieros.

5. Incorpórase como inciso g) del artículo 18 el siguiente texto:

g) Establecer políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales.

6. Modifícase el segundo párrafo del artículo 21, que quedará redactado como sigue:

El banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional, salvo por los depósitos que efectúe por cuenta y orden de éste en entidades financieras nacionales o internacionales, ni percibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta pero podrá cargarles los gastos que a su vez haya pagado a las entidades financieras.

7. Modifícase el artículo 49, que quedará redactado como sigue:

El superintendente podrá, previa autorización del presidente del banco disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o varias entidades financieras, por un plazo máximo de treinta (30) días. De esta medida se deberá dar posterior cuenta al directorio.

Si al vencimiento del plazo de suspensión el superintendente propiciara su renovación, sólo podrá ser autorizada por el directorio, no pudiendo exceder de los noventa (90) días. En tal caso el superintendente podrá prorrogar prudencialmente el plazo máximo establecido en el artículo 34, segundo párrafo, de la ley 21.526.

Mientras transcurra el plazo de suspensión no se podrán trabar medidas cautelares ni realizar actos de ejecución forzada contra la entidad. Asimismo, durante dicho período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá su exigibilidad, así como el devengamiento de los intereses, con excepción de los que correspondan por deudas con el banco. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún caso, dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el banco o el Estado nacional.

El superintendente podrá solicitar al directorio se revoque la autorización para operar de una entidad

financiera. En tal caso el directorio deberá evaluar tal solicitud en un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud. Este plazo será prorrogable por única vez, por otros quince (15) días corridos.

Art. 3º — Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley de Entidades Financieras:

1. Modifícase el segundo párrafo del artículo 15, que quedará redactado del siguiente modo:

El Banco Central considerará la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieren producido cambios fundamentales en las condiciones básicas que se hayan tenido en cuenta para acordarlas.

2. Incorpórase como capítulo IV del título III de la Ley de Entidades Financieras, el siguiente:

CAPÍTULO IV

Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios

Artículo 35 bis: Cuando a juicio exclusivo del Banco Central de la República Argentina, adoptado por la mayoría absoluta de su directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones previstas por el artículo 44, aquél podrá autorizar su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar. A tal fin, podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación de ellas:

I. Reducción, aumento y enajenación del capital social.

a) Disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el provisionamiento parcial o total de activos cuyo estado de cobrabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo juicio del Banco Central, y la reducción de su capital y/o afectación de reservas contra ellas;

b) Otorgar un plazo para que la entidad resuelva un aumento de capital social y reservas para cumplir con los requisitos establecidos por las normas aplicables, el que deberá ser suscrito e integrado dentro de dicho plazo. Los accionistas que suscriban dicho aumento de capital o integren nuevo capital deberán ser autorizados de conformidad con lo previsto en el artículo 15.

El Banco Central fijará el plazo en caso del inciso a) y de este inciso teniendo en cuenta los plazos mínimos legales para el otorgamiento de los actos societarios

del representante legal, del órgano de administración, y del órgano asambleario necesarios para su implementación;

c) Revocar la aprobación para que todos o algunos accionistas de una entidad financiera continúen como tales, otorgando un plazo para la transferencia de dichas acciones, que no podrá ser inferior a diez (10) días;

d) Realizar o encomendar la venta de capital de una entidad financiera y del derecho de suscripción de aumento de capital. A este efecto, la entidad y los socios prestarán su conformidad y depositarán los títulos representativos de sus participaciones, si ello no hubiera ocurrido hasta ese momento.

II. Exclusión de activos y pasivos y transferencia a otras entidades financieras.

a) Disponer la exclusión de activos a su elección, valuados de conformidad a las normas contables aplicables a los balances de las entidades financieras, por un importe equivalente al de los distintos rubros del pasivo mencionado en el inciso b);

b) Excluir del pasivo los depósitos definidos en los incisos d) y e) del artículo 49, así como, en su caso, los créditos del Banco Central de la República Argentina definidos en el artículo 53, respetando el orden de prelación entre estos acreedores;

c) Autorizar y encomendar la transferencia de los activos y pasivos excluidos conforme a los incisos a) y b), manteniendo en cada caso la equivalencia entre los mismos;

d) Otorgar las facilidades previstas en el último párrafo del artículo 34 y aprobar propuestas orientadas a restablecer la liquidez mediante la sincronización de los vencimientos de activos y pasivos.

III. Intervención judicial.

Solicitar al juez de comercio la designación de un interventor judicial —con o sin desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración— cuando resultara necesario a fin de implementar las alternativas previstas en este artículo, y al solo juicio del Banco Central de la República Argentina se den los supuestos previstos por el artículo 44. El juez deberá designar como interventor a la persona que proponga el Banco Central de la República Argentina y dispondrá la intervención con las facultades que aquél le solicite, que no po-

drán exceder las que corresponden a los órganos de administración o gobierno, según corresponda.

IV. Responsabilidad.

En los casos previstos en este artículo se aplicará lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo *in fine*, de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, respecto de éste, los fideicomisos referidos en el artículo 18, inciso b), de la Carta Orgánica, y los terceros que hubieran realizado los actos en cuestión, salvo la existencia de dolo. La falta de legitimación alcanza a los acreedores, socios, administradores y la propia entidad.

3. Modifícase el inciso 5, artículo 41, que quedará redactado de la siguiente forma:

5. Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la presente ley.

4. Agrégase como segundo párrafo del artículo 45 el siguiente:

Cuando la liquidación hubiera sido solicitada directamente por la entidad, previo a todo trámite el juez notificará al Banco Central para que tome la intervención que le corresponde conforme a esta ley.

5. Modifícase el tercer párrafo del artículo 45, que quedará redactado de la siguiente forma:

Si las autoridades legales o estatutarias de la entidad lo solicitaren al juez y éste considerare que existen garantías suficientes, previa conformidad del Banco Central, podrá autorizarlas a que ellas mismas administren el proceso de su cese de la actividad reglada por la presente ley o de la liquidación de la entidad. En cualquier estado del proceso de autoliquidación de la actividad o de la persona jurídica, el juez podrá disponer la continuación de los mismos por la vía judicial si se dieran los presupuestos de la legislación societaria o concursal para adoptar tal determinación.

6. Modifícase el primer párrafo del artículo 48, que quedará redactado del siguiente modo:

El liquidador judicial deberá ser designado por el juez competente, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para los síndicos. En el supuesto de que se declare la quiebra de la entidad, el liquidador designado continuará desempeñándose como síndico.

7. Sustitúyese el inciso b) del artículo 49 por el siguiente:

b) La resolución que disponga la liquidación judicial tendrá la misma publicidad que la establecida por la Ley de Concursos para la declaración de quiebra, aplicándose de igual modo, en forma analógica, la publicidad y procedimiento para la insinuación y verificación de los créditos que componen el pasivo. Los pagos a los acreedores deberán efectuarse con la previa conformidad del juez interviniente, en concordancia con el inciso g), y aplicándose igualmente en forma analógica lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para la liquidación de los bienes y proyecto de distribución y pago a los acreedores.

8. Modifícanse los incisos d) y e) del artículo 49, los que quedarán redactados del siguiente modo:

d) Sobre la totalidad de los fondos en conjunto, sin distinción por clase de depósitos, que la entidad liquidada tuviese depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo, los depositantes tendrán un privilegio especial, exclusivo y excluyente, para la satisfacción de su crédito conforme a la siguiente prelación:

- Hasta la suma de cinco mil pesos (\$ 5.000) por persona, o su equivalente en moneda extranjera, gozando de este privilegio especial una sola persona por depósito.
- Sobre el remanente de los encajes, la totalidad de los depósitos constituidos a plazos mayores de noventa días.
- Sobre el saldo de los encajes, el remanente de los depósitos a prorrata.

Al resolver la revocación de la autorización para funcionar de conformidad con el artículo 44, o durante el periodo de suspensión transitoria, el Banco Central de la República Argentina podrá ordenar que se efectivice el pago a los depositantes que gocen del privilegio previsto en este inciso;

e) Los depositantes tendrán privilegio general y absoluto para el cobro de sus acreencias por sobre todos los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca.

Al resolver sobre la revocación de la autorización para funcionar, de conformidad con el artículo 44, el Banco Central de la República Argentina podrá autorizar que se efectivice el pago a los depositantes del privilegio dispuesto por este inciso a prorrata de los fondos líquidos de que disponga la entidad, cumplimentado lo dispuesto en el inciso anterior.

9. Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 50 por el siguiente:

Estando la entidad en proceso de liquidación judicial, el liquidador deberá solicitar de inmediato la declaración de quiebra si advirtiera la cesación de pagos por sí mismo, o en virtud de los pedidos de quiebra formulados por terceros. De igual modo deberá proceder el juez si advirtiera la existencia de los presupuestos falenciales. El pedido y la declaración tramitarán previa citación al deudor por el plazo de cinco días.

10. Modifícase el artículo 51, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 51: Una vez que el juez interviniente declare la quiebra, ésta quedará sometida a las prescripciones de esta ley y de la Ley de Concursos y Quiebras, salvo en lo concerniente a las siguientes disposiciones:

- a) No serán reputados ineficaces ni susceptibles de revocación, de conformidad con las normas de la Ley de Concursos y Quiebras, los actos realizados o autorizados por el Banco Central por los supuestos previstos en la ley vigente hasta la sanción de la ley 24.144, ni los actos realizados o autorizados a realizar a entidades o terceros de acuerdo a las disposiciones del artículo 35 bis de la presente ley y el artículo 17 incisos b), c) y e) de la Carta Orgánica del Banco Central, ni los créditos del Banco Central con el privilegio absoluto del artículo 53 ni sus garantías;
- b) En ningún caso serán aplicables las normas sobre continuación de la explotación de la empresa;
- c) Lo dispuesto por los incisos d) y e) del artículo 49 será igualmente aplicable en caso de quiebra.

11. Modifícase el artículo 53, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 53: Los fondos asignados y créditos otorgados por causa de redescuentos, adelantos, pagos efectuados en virtud de convenios de créditos recíprocos o por cualquier otro concepto, le serán satisfechos al Banco Central con privilegio absoluto por sobre todos los demás créditos, con las siguientes excepciones:

- a) Los créditos de los depositantes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 incisos d) y e);
- b) Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca, prenda, o las garantías otorgadas conforme a lo previsto por el artículo 17, incisos b) y c) de la Carta Orgánica del Banco Central, en la extensión de sus respectivos ordenamientos;
- c) Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales, comprendidos en el ar-

tículo 268 de la ley 21.297 (t.o. 1976). Tendrán el mismo privilegio los intereses que se devenguen por las acreencias precedentemente expuestas, hasta la cancelación total.

12. Agréganse los siguientes párrafos al artículo 62:

En los casos previstos en el artículo 44, inciso c), las cajas de crédito y bancos comerciales que revistan la forma jurídica de cooperativa o de asociación civil podrán transformarse en sociedades anónimas o constituir una sociedad anónima para transferirle el fondo de comercio a los efectos del ejercicio de la actividad financiera, con la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

Cualquiera sea el tipo societario, en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 35 bis los socios o accionistas podrán ejercer el derecho de recesso, resultando inaplicables las disposiciones de los artículos 78, 245 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales.

Art. 4º — Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las inversiones financieras previstas en el decreto 445, del 28 de marzo de 1995, con la finalidad allí contemplada.

Art. 5º — Encomiéndase al Poder Ejecutivo confeccionar un texto ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y de la Ley de Entidades Financieras, que contemple lo previsto por el artículo 7º de la ley 24.144.

Art. 6º — Deróganse los artículos 26, 27, 28 y 29 del decreto 290/95 dictado el 27 de febrero de 1995.

Art. 7º — Créase en el ámbito del Congreso Nacional, una Comisión Bicameral de Seguimiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial decreto 286/95, y del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria decreto 445/95 y del artículo 8º de la ley 24.145. Deberá estar constituida en un plazo de treinta días corridos desde la fecha de sanción de la presente ley.

1. Dicha comisión estará integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, los que establecerán su estructura interna. La integración de la comisión deberá reflejar la actual composición pluralista de ambas Cámaras.
2. Dicha comisión tendrá como misión el seguimiento de las medidas a implementarse conforme a los decretos 286/95, 445/95 y de la ley 24.145, por lo cual el Poder Ejecutivo nacional, deberá informar sobre las resoluciones a adoptarse en virtud de los referidos instrumentos legales.
3. Para cumplir su cometido, la comisión podrá requerir información a todas las entidades previstas en las disposiciones de los referidos decretos.
4. La Comisión Bicameral podrá requerir información al Poder Ejecutivo, formular observaciones,

propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictámenes en los asuntos a su cargo. Los órganos de contralor del Estado deberán prestar inmediata y obligatoriamente toda su colaboración informativa e infraestructura organizacional que la comisión requiera para el cumplimiento de su cometido. En igual sentido deberán prestar su apoyo, el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

5. Todos los informes que la comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras.

6. A los efectos del cumplimiento de sus fines, la comisión bicameral queda facultada a dictar su propio reglamento de funcionamiento.

Art. 8º — La presente ley tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril del año mil novecientos noventa y cinco.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

EDUARDO MENEM.
Edgardo R. Piuzei.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 12 de abril de 1995.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto por el cual se observa parcialmente el proyecto de ley sancionado bajo el número 24.485, por los fundamentos expuestos en los considerandos de dicho decreto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.
Domingo F. Cavallo.

Decreto 538 del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 12 de abril de 1995.

Visto el proyecto de ley 24.485, sancionado con fecha 5 de abril de 1995, y comunicado por el Honorable Congreso de la Nación a los fines del artículo 78 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo nacional la facultad

de expedir los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, por lo que la facultad otorgada por el artículo 1º al Banco Central de la República Argentina para organizar y poner en funcionamiento el sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios creado por la ley, podría vulnerar la distribución de competencias entre los poderes establecida en la Ley Fundamental. Ello, sin perjuicio de la autonomía funcional de dicha institución en virtud de lo dispuesto en su Carta Orgánica y del rol que le corresponde como autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras reformada por la ley que se promulga en el presente decreto.

Que asimismo, la clara intención del legislador de evitar que el sistema de seguro de garantía de los depósitos afecte los recursos del Banco Central de la República Argentina protegidos por la Ley de Convertibilidad, o los del Tesoro nacional, torna conveniente que la reglamentación de dicho sistema y su correspondiente administración sean dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo al procedimiento normal previsto en la Constitución Nacional.

Que en el artículo 7º del proyecto de ley a consideración del Poder Ejecutivo nacional se propone la creación de una comisión bicameral, cuyas funciones se superponen con las funciones propias de la administración, y las que les corresponden a los organismos de control. Al respecto debe ponderarse que el artículo 85 de la Constitución Nacional prevé, luego de su reciente reforma, las atribuciones de la Auditoría General de la Nación como órgano constitucional de asistencia técnica del Honorable Congreso de la Nación para el ejercicio del control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Asimismo, el artículo 34 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina prevé el mecanismo específico de los informes correspondientes a las operaciones de saneamiento de entidades financieras, y el artículo 10 del mismo cuerpo normativo impone a dicha institución la obligación de rendir el informe anual correspondiente. Por su parte, la ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control del sector público atiende con especificidad a cada una de las operaciones del sector público. Dichas razones fundamentan la observación de dicho artículo 7º, sin perjuicio del suministro de la información que en cada caso sea requerida por el Honorable Congreso de la Nación respecto a las operaciones a las que se refiere dicha norma.

Que, asimismo, para que la referencia que se hace al artículo 49 de la Carta Orgánica de Banco Central de la República Argentina en el artículo 35 bis, apartado IV, de la Ley de Entidades Financieras, resulte precisa luego de las modificaciones dispuestas por el proyecto de ley que se promulga en el presente, ordénase el texto de dicho artículo de modo que los dos (2) primeros párrafos queden separados por un punto seguido, integrando ambas el primer párrafo de dicho artículo.

Que el presente decreto se dicta en Acuerdo General de Ministros del Poder Ejecutivo nacional.

Que las facultades para el dictado del presente surgen de lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvanse las siguientes disposiciones del proyecto de ley registrado bajo el número 24.485:

a) La última parte del artículo 1º dice: "Facúltase al Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcionamiento el sistema creado por el presente artículo";

b) El artículo 7º.

Art. 2º — Con las salvedades establecidas en el artículo precedente, promúlgase y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el número 24.485.

Art. 3º — Ordénase el texto del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, modificado por la ley que se promulga en el presente decreto, de modo que los textos de los primeros dos (2) párrafos queden en el mismo párrafo separados por un punto seguido.

Art. 4º — Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación a los efectos previstos en los artículos 80 y 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

CARLOS S. MENEM.

Carlos V. Corach. — Guido Di Tella. — Oscar H. Camilión. — Domingo F. Cavallo. — Rodolfo C. Barra. — Jorge A. Rodríguez. — José A. Caro Figueroa. — Alberto J. Mazza.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: este dictamen se refiere a dos observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central.

La primera de ellas tiene que ver con la facultad que el Congreso Nacional le otorga al Banco Central para regular lo relativo a la garantía de los depósitos que dicha norma establece.

La segunda observación se refiere al artículo por el cual se crea una comisión bicameral encargada del control del proceso de funcionamiento del sistema de garantía de depósitos bancarios y del fondo fiduciario.

Debo destacar que desde que se produjeron estas observaciones hasta el momento, con respecto a la organización del sistema de garantías, se ha establecido por decreto un mecanismo diferente.

Creo que corresponde la insistencia respecto de la observación relativa a la creación de la citada comisión bicameral, ya que es un tema que involucra a los legisladores, al Congreso Nacional y a la necesidad de que sea éste el que ejerza el control y dicha función por disposición constitucional.

Pero quiero proponer al cuerpo, no obstante lo indicado en el dictamen, la no insistencia respecto de la primera observación, es decir, la relativa a la forma de funcionamiento del mecanismo de garantía de depósitos, porque al haberse establecido con posterioridad a la sanción de la ley un sistema distinto, si insistiéramos en ella estaríamos dando la sensación de que se está cambiando el sistema. Y a pesar de que no compartimos los criterios de esa observación, debemos decir que una modificación del sistema iría en contra del principio de la seguridad jurídica —que debe existir— y, fundamentalmente, dejaría la sensación de que estamos alterando un régimen que ya está funcionando.

Por lo tanto propongo que se apruebe la insistencia respecto del segundo aspecto vetado, es decir, con relación al artículo 7º, y que se acepte la observación efectuada al artículo 1º.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente: efectivamente, como ha señalado el señor miembro informante por la mayoría, se han producido algunas modificaciones en estos días con relación al funcionamiento del sistema de garantía de depósitos bancarios.

Supongo que el señor senador se ha referido a la disposición adoptada recientemente, respecto de que la garantía sobre los depósitos está condicionada por la tasa de interés que ofrecen las distintas entidades bancarias.

¿A eso se ha referido el señor senador?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: en la sanción originaria, por el artículo 1º se creaba un sistema de seguro de garantía de depósitos bancarios obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de dichos depósitos en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin com-

prometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro nacional.

Ahora voy a leer lo que ha sido observado: "Facúltase al Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcionamiento el sistema creado por el presente artículo".

Este artículo es observado; se crea el sistema, pero no bajo la órbita del Banco Central. Por lo tanto si nosotros insistiéramos, estaríamos alterando algo que ya está funcionando. Por eso pienso que, en este caso, tal vez sea más conveniente dejar el sistema que ya está funcionando para no crear una sensación de inseguridad si es que en estos días tuviese que volver a modificarse.

Sr. Cendoya. — Tengo la duda sobre si usted se refiere a la conveniencia de no insistir sobre la creación de esas sociedades para administrar la garantía de los depósitos o si es todo el sistema en general el que merece no ser alterado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Acá no estamos analizando un sistema que está puesto en vigencia porque no corresponde a la ley sino a la reglamentación. La única diferencia está en que nosotros, en ese momento, aprobamos que todo este sistema estuviera organizado bajo la órbita del Banco Central. Esto no ha sucedido así sino que se ha creado un sistema que está funcionando de otro modo y lo que quiero decir es que no creemos conveniente que al insistir se vuelva a alterar la órbita en la cual se encuentra este sistema. Más allá de que en otra oportunidad sí deberíamos analizar — como el señor senador por Córdoba propone — el régimen que está en funcionamiento.

Pero respecto de este análisis, acerca de cómo está funcionando no hemos tenido una consideración de fondo sino que tratamos de no alterar el ámbito dentro del cual está ese sistema, para no crear una nueva sensación de inseguridad respecto de dónde procede la autoridad de aplicación del sistema mencionado de garantías.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Con respecto a las aclaraciones que ha formulado el señor miembro informante de la mayoría, nuestro bloque va a acompañar su posición en cuanto a la insistencia sólo parcial de la ley oportunamente sancionada por el Congreso.

Efectivamente, en estos días, se están produciendo modificaciones importantes — tanto por

vía reglamentaria como por vía de resoluciones — al sistema de garantía de los depósitos. Incluso, como señalaba recién, hace dos o tres días se vinculó la garantía de los depósitos a una tasa máxima a percibir por los bancos, lo cual revela la profundidad del problema y la necesidad de no interferir en su funcionamiento, tal como se está produciendo en la actualidad, sin perjuicio de que después sí pueda considerarse el éxito o fracaso del sistema.

Si nos parece conveniente seguir insistiendo en la creación de la comisión bicameral porque nosotros, desde el ámbito legislativo, estamos teniendo en este momento muchos requerimientos de distintos legisladores de todas las bancadas acerca del funcionamiento del fondo fiduciario, por lo que nos parece prudente que, dada la importancia y trascendencia que tiene este tema, se lo localice definitivamente bajo la dependencia exclusiva de esta comisión propuesta por nosotros.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Complementando lo que expresaba el señor senador por Córdoba, es obvio que la pronta integración de esta comisión va a permitir analizar, a través de seguimientos, todos esos aspectos que hacen al funcionamiento del régimen y sus posteriores modificaciones. Más allá de que esté o no bajo la órbita del Banco Central, confiamos en que la función de la comisión va a tener una importancia fundamental. No sólo por la preocupación que tienen los señores senadores sino también por la del público — que a nosotros nos interesa que esté informado — sobre el buen funcionamiento de este régimen de garantía de los depósitos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Fadel. — En oportunidad de tratar este proyecto nuestro bloque votó en contra, a pesar de compartir su filosofía, porque creíamos que no existían los niveles de control que garantizaran la transparencia en cuanto a este seguro de garantías.

Pero en esta oportunidad vamos a acompañar con nuestro voto, ya que consideramos que la situación es atendible.

En primer lugar, la instrumentación que se ha realizado dentro del Poder Ejecutivo ha sido a partir del veto. Si bien no compartíamos ese veto creo que no es oportuno que lo rechazemos, pues haríamos volver atrás todas las actuaciones que se han hecho a partir del mismo.

En segundo término vamos a acompañar la insistencia propuesta por el bloque de la mayoría ya que consideramos que las pocas herramientas que se tienen para el control y seguimiento de este seguro deben seguir existiendo. Por estas razones, dejamos fundamentado el voto del bloque PAIS favorable a esta insistencia.

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, hay una sola moción que consiste en aceptar la observación a la última parte del artículo 1° y confirmar la sanción del artículo 7°.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: era para hacer una aclaración de tipo constitucional.

La insistencia puede ser total o parcial. Es facultad de Parlamento insistir en forma total o parcial. Esto lo quiero dejar claramente señalado frente a algunas peregrinas teorías que circulan por ahí que dicen que el Parlamento solamente puede insistir en forma total y no parcialmente.

Hay algo de sentido común, que hasta el último paisano de mi pueblo lo sabe, y es que en derecho como en la vida el que puede lo más puede lo menos. Esto es una cuestión de sentido común, y el derecho y la Constitución ante todo son sentido común, son el respeto al orden natural de las cosas. Y está en el orden natural de las cosas que cuando se le otorga a un órgano una determinada facultad o un determinado marco, puede utilizarlo total o parcialmente.

Por eso quería hacer esta reafirmación: el Parlamento cuando insiste puede hacerlo en forma total o parcial, porque si no esto sería un diálogo de sordos ya que algún error que se haya podido escapar puede ser aceptado por esta vía. Y en esto el errar es humano.

Quería hacer esta aclaración sobre todo para descalificar esas peregrinas teorías —que deben tener uno o dos autores escondidos en algún lugar trasnochado— acerca de que la insistencia puede ser solamente total.

Esto de ninguna manera puede ser aceptado porque va en contra del sentido común, que a pesar de ser a veces el menos común de los sentidos, es fundamental en cuanto al derecho.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: quiero acompañar expresamente esta interpreta-

ción que ha aformulado el señor senador por Jujuy.

Esta se basa en la famosa teoría de los poderes implícitos que el profesor Aja Espil ha enriquecido estableciendo la facultad de los poderes inherentes. Sea poder implícito o inherente independientemente de la facultad en forma expresa a la que se ha referido el señor senador por Jujuy, es evidente que nosotros no podemos sino descalificar cualquier teoría que quiera castrar las facultades que son otorgadas constitucionalmente al Poder Legislativo.

Por estas razones es que quiero acompañar expresamente —y creo que será compartida por todos los bloques de esta Cámara— esta interpretación que es oportuno que la hagamos para que se evite una discusión en el futuro que realmente sería inaceptable para el Congreso Nacional.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — En el mismo sentido, señor presidente, y siguiendo el concepto de la cita del señor senador por Jujuy —no nombró a su autor, que es Oscar Wilde, quien ha dicho aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos— quisiera agregar que en este caso concreto, además, la exacta correlatividad entre el hecho de que la ley vetada parcialmente haya sido a la vez promulgada parcialmente, refuerza lo ortodoxo del criterio que estamos propagando.

De manera que en esto se nota claramente, además de un mero sentido de equilibrio y de sentido común, que cuando el Poder Legislativo insiste parcialmente ejerce una potestad propia y de ninguna manera anómala, como lo han sostenido esas anómalas teorías que han tenido cierta publicidad.

Sr. Presidente (Menem). — Existe una sola moción en el sentido anteriormente indicado y, por razones prácticas, no vamos a realizar dos votaciones respecto de cada uno de los puntos, dado que se trata de una votación nominal.

Por lo tanto, vamos a fijar la siguiente interpretación: el voto afirmativo significará apoyar esta propuesta en el sentido de que se acepta la observación al artículo 1° y se confirma el artículo 7°.

La votación por la negativa implicará, desde luego, la no aceptación de esta moción; pero como no se ha formulado otra, no puedo especificar qué significa votar por la negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en la forma propuesta.

— Se practica la votación nominal.

— Votan por la afirmativa los señores senadores Aguirre Lanari, Avelín, Bittel, Bordón, Branda, Cabana, Cafiero, Cendoya, Costanzo, Fadel, Figueroa, Genoud, Humada, Lafférière, León, Losada, Mac Karthy, Martínez Almudevar, Mazzucco, Peña de López, Romero, Rubeo, San Millán, Snopek, Solana, Solari Yrigoyen, Verna, Villarroel y Menem.

Sr. Secretario (Piuzzi). — Han votado 29 señores senadores por la afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la insistencia parcial en la forma antes referida, razón por la cual pasa a la Cámara de Diputados con la mayoría requerida por la Constitución.¹

23

DESERTIFICACION EN LA PATAGONIA

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley del señor senador Mac Karthy por el que se declara de interés nacional el proyecto de Desarrollo Sustentable para la Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia (Prodeser), instrumentado por el INTA. (Orden del Día N° 227.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). — *(Lee)*

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Población y Desarrollo, y de Agricultura y Ganadería han considerado el proyecto de ley del señor senador nacional don César Mac Karthy, declarando de interés nacional el Proyecto de Desarrollo Sustentable para la Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia (Prodeser) implementado por el INTA; y por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 15 de junio de 1995.

Jorge D. Solana. — Faustino M. Mazzucco. — Jorge J. Cendoya. — Conrado H. Storani. — José Genoud. — Remo J. Costanzo. — César Mac Karthy. — José A. Romero Feris. — Fernando de la Rúa. — Luis A. León. — Jorge J. Massat. — Carlos A. Verna.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Declárase de interés nacional el Proyecto de Desarrollo Sustentable para la Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia (Prodeser), implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con ajuste al Convenio de Cooperación Técnica celebrado oportunamente con la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) de Alemania.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo nacional preverá en los presupuestos de la administración nacional de los años fiscales 1996 y siguientes, los recursos económicos suficientes para permitir al INTA la integración total de las contrapartidas que le correspondan en el presupuesto operativo del proyecto.

Art. 3º — Encomiéndase al Ministerio de Economía implementar dentro de los próximos cinco años, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, un programa similar al previsto en el Prodeser, que recoja mediante monitoreo satelital, teledetección y control de campo información precisa y detallada sobre la existencia y evolución de los diversos procesos de desertificación que afectan a diferentes regiones del país y sobre el potencial intrínseco de los recursos naturales de cada zona.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

César Mac Karthy.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El problema de la desertización o desertificación de vastas zonas de la República Argentina viene causando preocupación a técnicos y especialistas desde hace largo tiempo.

El ex Instituto de Suelos y Agrotecnia había estimado ya en el año 1957, que casi una tercera parte de las cuarenta y un millones de hectáreas de la región semiárida del país estaba afectada por problemas de erosión, según lo resalta el mensaje de la ley 22.428 sobre fomento de la conservación de suelos. En la actualidad, se estima que un tercio de la superficie del país está afectada por el fenómeno.

En este panorama, si bien casi todas las regiones del país padecen el problema en distinto grado y por diferentes causas, la Patagonia es la región que más gravemente sufre la desertización, tanto climática como antrópica, destacándose por la extensión de la superficie afectada y el ritmo de avance del daño, dinamizado por prácticas de sobrepastoreo ovino, tala indiscriminada de arbustos con destino a leña, etcétera; y en donde ésta existe, preponderantemente por la explotación petrolera y sus secuelas.

Las manifestaciones de este proceso: enormes extensiones de terreno totalmente degradadas, con sus capas fértiles perdidas, pavimentos de desierto, lenguas de erosión y cárcavas causadas por las avenidas, constituyen un dramático testimonio de su gravedad.

¹ Ver el Apéndice.